

REPÚBLICA DE COLOMBIA



RAMA JUDICIAL

TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN

Medellín, diecinueve (19) de julio de dos mil veintidós (2022)

La Sala Cuarta de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín, integrada por los Magistrados CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES (ponente), MARIA EUGENIA GÓMEZ VELÁSQUEZ y NANCY GUTIÉRREZ SALAZAR, cumplido el traslado de que trata el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, procede a dictar la sentencia que corresponde en este proceso ordinario instaurado por ZULEMA ÀLVAREZ PEÑA en contra de PROPLAS S.A, el SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA PLÁSTICA DE COLOMBIA -SINTRAINDUPLASCOL-, y la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES -COLPENSIONES- (Radicado 05360-31-05-002-2019-00174-01).

ANTECEDENTES

La demandante inició este juicio para que se declare la existencia de un contrato de trabajo con Proplas S.A bajo modalidad indefinida, ejecutado entre el 20 de noviembre de 2006 y el 11 de marzo de 2017, terminada por decisión unilateral de la parte empleadora, relación en la que Sintrainduplascol actuó como simple intermediaria y se condene de forma conjunta y solidaria a las demandadas a pagar la indemnización por despido sin justa causa, los salarios, prestaciones sociales legales y vacaciones canceladas de forma deficitaria, las prestaciones extralegales y convencionales no reconocidas, al pago del título pensional por aportes no pagados en debida forma, debiendo Colpensiones recibirlos, se reconozca la sanción moratoria del artículo 65 del

CST y la consagrada en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 o en subsidio la indexación, además de las costas del proceso.

Tales aspiraciones las basó a partir de los siguientes fundamentos fácticos: Proplas S.A suscribió con Sintrainduplascal un contrato sindical tendiente a la ejecución de actividades inherentes a la industria plástica. El sindicato vinculó a la demandante por contrato celebrado el 20 de noviembre de 2006 sin ser admitida a la organización, lo que ocurrió solo hasta el 20 de octubre de 2008, para desempeñarse como operaria de inyección y soplado devengando el salario mínimo legal por medio de consignación, en un horario rotativo de tres turnos que se alternaban en ocho horas diarias de lunes a sábado. Proplas S.A asignada los horarios a través de sus coordinadores vinculados, siendo esta quien les proporcionada el uniforme, le brindaba los instrumentos de trabajo y daba las órdenes e instrucciones y permisos. Señala que Sintrainduplascal nunca celebró la asamblea anual de afiliados ni dio a conocer el reglamento que se exige al contrato sindical. El 11 de marzo de 2017 le informaron a la actora que debía presentarse en la oficina del sindicato, comunicándosele que había decidido dársele por terminado su contrato de trabajo siendo firmada una terminación por mutuo acuerdo sin mediar voluntad de la trabajadora.

Colpensiones se pronunció en oportunidad advirtiendo no constarle ninguno de los hechos expuestos por serle ajenos. Como medios exceptivos formuló los de falta de legitimación en la causa por pasiva, prescripción, buena fe de Colpensiones e imposibilidad de condena en costas.

Por su parte el SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA PLÁSTICA DE COLOMBIA -SINTRAINDUPLASCOL-, aceptó la celebración del contrato sindical para servicios en favor de Proplas S.A y niega la existencia de un contrato de trabajo entre la trabajadora y la empresa a quien se le prestaba el servicio además de su intermediación en esa contratación, advirtiendo que el verdadero empleador de la demandante fue el Sindicato de quien provenían las instrucciones, los pagos y los uniformes, siendo finalizado el vínculo por mutuo acuerdo sin que se adeuden rubros acorde a lo pregonado en el decreto 1429 de 2010. Se opuso a las pretensiones y propuso como

excepciones de fondo las que denominó pago, falta de causa para pedir, buena fe, compensación y prescripción.

PROPLAS S.A aceptó igualmente la suscripción del contrato sindical y niega contratación con esta empresa frente a la actora, advirtiendo no constarle detalles contractuales surtidos con el Sindicato al que la trabajadora perteneció como miembro partícipe. Como medios de oposición formuló las excepciones de mérito de prescripción, compensación. Buena fe e inexistencia del derecho reclamado.

En ese marco procesal, el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Itagüí profirió la sentencia del 28 de junio de 2021, en la que ABSOLVIÓ a las demandadas de cada una de las pretensiones, DECLARÓ probada la excepción de inexistencia del derecho reclamado y CONDENÓ en costas a la demandante, fijando como agencias en derecho la suma equivalente a medio salario mínimo legal mensual vigente.

La activa busca la revocatoria de la decisión, advirtiendo la demostración de los elementos del contrato de trabajo frente a Proplas S.A, siendo dable dar aplicación a la presunción que pregona el artículo 24 del CST, quedando probado que quienes supervisaban y emitían las órdenes en cuanto a la ejecución de la labor, era Proplas a través de sus trabajadores vinculados, actividad que prestaba de manera personal y le era remunerada. Señaló que fue ausente la prueba sobre la autonomía técnica y administrativa por ser claro que era Proplas S.A quien suministraba los elementos de trabajo y definía cuándo se contrataba y cuándo se despedía a los trabajadores. Adujo que debe hacerse valoración de la documental que contiene la constancia de la solicitud de admisión y la renuncia al sindicato contratada con la fecha en que se firmó el contrato de trabajo habiendo estado por más de dos años ejerciendo iguales funciones que los trabajadores vinculados sin estar afiliada a la organización sindical, cuestionando que primero se acudiera a las empresas de servicios temporales, dejándolas en desuso para acudir al contrato sindical. Agregó que la ausencia de documental pedida por el despacho y que Proplas S.A se abstuvo de suministrar da lugar a dar por probados los hechos de la demanda.

En el término pertinente, las partes presentaron sus alegaciones de segunda instancia, con argumentos semejantes a los expuestos en las etapas procesales transcurridas en primer grado.

CONSIDERACIONES

No es objeto de discusión que entre Proplas S.A y Sintrainduplascal fueron celebrados sendos contratos sindicales con el objeto de obtener la prestación de servicios y/o ejecución de obras por parte del Sindicato dentro de las plantas de producción, talleres u oficinas de Proplas S.A (fls.253-298, 308-326, 334-346), lo que derivó en la contratación de la demandante por medio de un “*convenio de asociación*” (fls. 46-53) de parte de la organización sindical para desempeñarse como operaria, actividad laboral que se ejecutó entre el 20 de noviembre de 2006 y el 11 de marzo de 2017 (fl.54).

El asunto a definir por la Sala se circunscribe a determinar si la verdadera empleadora de las demandantes fue Proplas S.A, esto es, si el contrato sindical que se suscribió con SINTRAINDUPLASCOL se desnaturalizó, obrando el sindicato codemandado como un simple intermediario que suministró personal de manera ilegal a la primera, en consecuencia, si hay lugar o no a las prestaciones convencionales reclamadas, y de ser así, ha de definirse su efecto en la liquidación y posible reajuste de las legales.

Pues bien, el contrato sindical es un negocio jurídico por el cual la unión de trabajadores puede suministrar un servicio o realizar una obra en favor de uno o varios empleadores o sindicatos patronales, a través de sus afiliados de manera auto gestionada y cooperativa, a cambio de que la organización sindical, responda tanto por las obligaciones ante la empresa, como por las obligaciones ante los trabajadores afiliados, convenio que además debe suplir ciertas formalidades, como su depósito ante el Ministerio del Trabajo dentro de los 15 días siguientes a su suscripción (artículos 482 a 484 del CST reglamentados por el Decreto 1429 de 2010).

En Colombia, esta clase de contratos ha permitido el enganche al mundo laboral de muchos ciudadanos, pero al mismo tiempo ha suscitado la precarización de las condiciones en que se desarrollan las actividades productivas, pues no son pocos los casos conocidos por la jurisdicción, en los que los empleadores han echado mano de este convenio con el objetivo de disminuir costos en detrimento de los derechos mínimos e irrenunciables que regula el Código Sustantivo del Trabajo, disfrazándose el contrato de trabajo que en realidad gobierna a las personas que prestaron sus servicios, es decir, con la finalidad de no reconocer los derechos laborales; esto, en vista que en otrora se utilizaba para ese efecto a las Cooperativas de Trabajo Asociado, pero que ante la prohibición prevista en el artículo 63 de la Ley 1429 de 2010, debió suspenderse su uso como intermediarias, lo que auspició la creación de sindicatos de trabajadores ficticios, mutando la vinculación de los trabajadores entre una y otra modalidad.

No obstante, tal prohibición se extiende también a los contratos sindicales, dado que la disposición en comento, señaló que el personal requerido en toda institución y/o empresa pública y/o privada para el desarrollo de las **actividades misionales permanentes** no podrá estar vinculado a través de Cooperativas de Servicio de Trabajo Asociado que hagan intermediación laboral o bajo ninguna otra modalidad de vinculación que afecte los derechos constitucionales, legales y prestacionales consagrados en las normas laborales vigentes.

Al respecto, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en la sentencia SL3086 del 30 de junio de 2021, señaló que el uso del contrato sindical, en algunas ocasiones se trata de una modalidad de vinculación que afecta los derechos en comento, dado que, disminuye su nivel de disfrute, tan solo con distorsionar la figura del verdadero empleador, y ante la hermenéutica correcta de la regla 63 de la Ley 1429, dijo:

“...para la Sala es absolutamente claro que la mencionada disposición no está destinada exclusivamente a las cooperativas de

trabajo asociado, pues establece diáfananamente que la prohibición se extiende a cualquier «[...] otra modalidad de vinculación que afecte los derechos constitucionales, legales y prestacionales consagrados en las normas laborales vigentes.» Y, al hacer mención de «ninguna otra modalidad de vinculación», en términos amplios, es obvio que la norma abarca los contratos sindicales y toda forma de vinculación fraudulenta... (...) la Corte debe señalarlo con vehemencia, los sindicatos no se pueden convertir en un triste sucedáneo de las cooperativas de trabajo asociado, que ejercían labores de suministro de personal de manera fraudulenta, luego de la prohibición generada normativa y jurisprudencialmente, que vino a ser refrendada con el artículo 63 de la Ley 1429 de 2010....”

Dentro de los requerimientos que buscan evitar la intermediación laboral, están los contenidos en el artículo 5° del Decreto 1429 de 2010, y los artículos 2.2.2.1.16 al 2.2.2.1.23 y del 2.2.2.1.24 al 2.2.2.1.32 del Capítulo 1 del Título 2 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1072 de 2015, modificados y adicionados por el Decreto 36 de 2016, que disponen la obligatoriedad de ser elaborado un reglamento por cada contrato sindical que debe contener entre otros elementos, el tiempo mínimo de afiliación al sindicato para participar en la ejecución de un contrato sindical, además de requerirse para su celebración la afiliación de los trabajadores y una estructura con capacidad administrativa y financiera para prestar los servicios.

De modo que, este negocio jurídico sigue siendo válido, siempre y cuando, una vez analizado bajo la óptica de la supremacía de la realidad sobre las formalidades, se constate que quien lo celebró se trata de un sindicato sólido y financieramente sostenible; haya estado sometido a veedurías y garantías especiales, hubiese sido suscrito tras la aprobación de reglamentos claros que velen por la protección de los derechos de los trabajadores partícipes, y que salvaguarde *la afiliación de los servidores al sistema de seguridad social, el desarrollo de normas de salud ocupacional y seguridad industrial y la promoción de capacitación, educación y vivienda para los afiliados* (Sentencias CSJ SL3086 de 2021).

Si no se cumplen las exigencias normativas, la utilización de la figura del contrato sindical, pierde su vigor y pasa a convertirse en una simple intermediación laboral, que desde luego no es el objeto y la finalidad para la cual fue instituida dicha forma de contratación.

Dada la advertencia expuesta por el apoderado recurrente en su recurso, es necesario considerar para ahondar en la situación fáctica contractual de la demandante, la satisfacción de las restricciones formales para que pudiera darse uso a la figura del contrato sindical. Al respecto, se tiene que clara y lógicamente una de las exigencias para dar validez al contrato sindical es que el trabajador partícipe esté afiliado al Sindicato, por lo que se acude a la documental de folio 65 de donde se desprende una solicitud de admisión a la organización Sintrainduplascol de Zulema Álvarez Peña el 20 de octubre de 2008 pese a haber iniciado labores el 20 de noviembre de 2006, y el escrito de folio 328 hace referencia a una renuncia como socia en la misma data, señalando el representante de la activa la inexistencia de la afiliación durante la vinculación, debiendo exponerse al respecto, que tales documentales de forma aislada no guardan coherencia, pues no es dable entender que la empleada solicitó la admisión al sindicato en la misma fecha en la que presentó su renuncia y por tanto, tampoco guarda concordancia advertir que esa solicitud y retiro hayan sido las únicas gestionadas ante la organización, ya que si acudimos al acta de asamblea del 02 de agosto de 2009 (fl. 327-331) se aprueban nuevos afiliados donde está incluida la demandante, resultando confusa la manera en cómo se dio manejo a la calidad de socia al sindicato de la demandante, pero claramente no se trató de una permanencia continuada a la vez que ocurrió con la prestación del servicio, pudiendo colegirse aunque con asomo de duda por falta probatoria que cada contrato sindical implicaba el fin y un nuevo inicio de la afiliación al sindicato en relación a cada contrato sindical celebrado, con lo que es dable denunciar que la afiliación sindical de la actora obedecía al mero cumplimiento de una condición o formalidad impuesto a fin de acceder o continuar en un empleo, desconociéndose con ello la libertad sindical en su faceta individual (Ver SL1174-2022).

Como se anotó en líneas precedentes, como requerimiento normativo para soslayar la tercerización laboral por medio de este modelo de contrato, es necesario contarse con un reglamento sobre cada contrato sindical celebrado para verificarse de paso la satisfacción de todos los requerimientos enlistados en el artículo 6° del Decreto 657 de 2006¹ vigente para la fecha en que inició la actividad laboral de Zulema Álvarez, contándose únicamente con el efectuado frente al pacto sindical suscrito 15 de octubre de 2005 (fls. 363-370), y que es anterior a la fecha de contratación de la demandante, reglamentos que se funden en necesarios, pues con ellos se busca propender por las garantías mínimas de los afiliados partícipes para que actúen en un plano de igualdad al momento de intervenir entre sí y con el sindicato en la ejecución del contrato sindical, y además para precisamente evitar que esta modalidad contractual se use para generar procesos de suministro de personal y atender actividades misionales y permanentes de una empresa, no siendo dable colegir la debida satisfacción de estos requisitos formales, por lo menos atendiendo los medios de convicción aportados.

Ahora, en lo que atañe a las circunstancias contractuales, de las pruebas arribadas a este escenario, se encuentra que la contratación externa promovida por Proplas S.A. tampoco atiende los fines constitucionalmente legítimos de esa figura, pues contrario a atender necesidades particulares y contingentes de la empresa, la relación triangular se usó con la intención de deslaborar a los trabajadores y suplir actividades misionales permanentes y propias de la empresa, lo que a todas luces contraría el contenido del ya mencionado artículo 63 de la Ley 1429 de 2010, dado que si bien la pasiva pretende hacer ver que la vinculación de la demandante tuvo por razón cubrir incrementos de producción conforme a la necesidad del servicio acorde a lo aducido por los testigos Olga Lucía Ibarra Arcila y Jhon Fredy Torres Salgado, último que señaló que Proplas S.A. contaba con un trabajo bastante variable por la demanda y la oferta, es indudable que la función de la demandante como operaria se surtió por poco más de 10 años de manera lineal y sin interrupciones, actividad que por demás estaba destinada al cumplimiento de

¹ Por el cual se reglamentan los artículos 482, 483 y 484 del Código Sustantivo del Trabajo.

la actividad económica y objeto social de la convocada (fl.518), siendo un despropósito aceptar que transcurrido ese lapso, la trabajadora estuviera supliendo ciertas y concretas demandas de servicios, cuando es evidente que la función que ejerció recaía sobre una actividad invariable en el tiempo para ser provista con la planta de personal.

A más de lo dicho, lo que dejan ver las probanzas es que la señora Zulema Álvarez Peña era una trabajadora subordinada a Proplas S.A, porque, aunque es indiscutido que a nombre de Sintrainduplascol se realizaban los pagos de nómina decadalmente (fls. 194-197), se efectuaban los aportes al sistema de Seguridad Social (fls. 67-164 y 171-180), se autorizaban las vacaciones (fls. 420-425), las entregas de rubros derivados de la contratación (fls. 55-64), y con el logo de la organización sindical obra una documental de control de inducción, capacitación y entrenamiento (fls. 435-439), de ellos no es viable desprender el poder subordinante que se asegura existió por la pasiva.

En contraposición a lo anterior se cuenta con la prueba testimonial conformada por José Elmer Tabares y Jaime Alberto Zapata, extrabajadores vinculados directamente a la empresa, mismos que resultaron coherentes, espontáneos y responsivos sin observarse algún interés que otorgue parcialidad a sus dichos, quienes dieron cuenta que la demandante como operaria de inyección y soplado, desarrollaba su actividad bajo las órdenes e instrucciones del supervisor como todos los operarios que prestaban el servicio a la compañía que para la época lo eran Iván Vásquez, Walter García y Omar Cardona - todos vinculados a Proplas S.A-, ejecución de labores desplegada bajo idénticas condiciones de trabajo en el marco de las tareas asignadas y el horario cumplido previamente asignado por producción, con la utilización de maquinarias y elementos de protección y de trabajo de propiedad de la sociedad, advirtiendo que los permisos requeridos por cualquier empleado de planta para ausentarse del lugar de trabajo, debían ser gestionados ante el supervisor, agregando Jhon Fredy Torres - testigo del sindicato vinculado- que la decisión se tomaba entre la empresa y la asociación, rescatándose como única diferencia el monto salarial y prestacional por resultarle más beneficioso

a los empleados con contrato directo, información anterior que fue debidamente corroborada por Olga Lucía Ibarra - Gerente Administrativa y Financiera de Proplas S.A- misma que agregó estar en manos de Proplas S.A qué personal se vinculaba y cuál debía retirarse.

Ese poder de sumisión laboral entonces, no es originario de Sintrainduplascol por el solo hecho de figurar en el papel y estar presente una empleada en una oficina dada en comodato para el Sindicato que en voces del representante Legal de la organización, tenía funciones meramente administrativas, no lográndose desprender de ese lado una intervención efectiva en la ejecución laboral de la actora, estando de la mano la ausencia de autonomía técnica y administrativa, lo que no permite evidenciar una estructura jurídica para ofrecer un servicio especializado (Ver SL3436-2021 y SL3086-2021) como sería su fin, encontrando contrario a ello, que el acatamiento y deber de obediencia debía impartirse ante Proplas S.A, quien a su vez, controlaba, dirigía y determinaba las circunstancias de tiempo, modo y lugar de la actividad desplegada por quien fue contratada en virtud de la figura del contrato sindical.

De modo que lo que dejan ver los vestigios es que la empresa Proplas S.A inició con la utilización de empresas de servicios temporales, y bajo la misma óptica y entorno, usó al sindicato como sucedáneo de las cooperativas de trabajo asociado, que ejercían labores de suministro de personal de manera fraudulenta, luego de la prohibición generada normativa y jurisprudencialmente, que vino a ser refrendada con el artículo 63 de la Ley 1429 de 2010 (Ver SL3086-2021).

En ese contexto, se predica que Sintrainduplascol, sirvió como simple intermediario en una relación de trabajo que en el plano de la realidad -artículo 53 CP- se suscitó entre Zulema Álvarez Peña y Proplas S.A bajo la concepción de los elementos del artículo 23 del CST, vínculo que fue ejecutado entre el 20 de noviembre de 2006 (fl. 46-53) y el 11 de marzo de 2017 (fl.54) extremos que están por fuera de la discusión de las partes, lo que de suyo evidencia una

contratación fraudulenta y un indebido uso del mecanismo de tercerización laboral en desmedro evidente de la demandante como afiliada partícipe, quien en el asunto salarial y prestacional vio afectados sus intereses, dándose lugar al análisis de las prerrogativas legales y convencionales a las que tenía derecho como trabajadora vinculada a la sociedad convocada en virtud a la Convención Colectiva vigente para la época de la contratación.

Salario

En primer lugar para abordar el tópico de las prestaciones debidas, debe establecerse el salario devengado por Zulema Álvarez, sin que sea objeto de oposición que en virtud al convenio de asociación, la demandante percibía como contraprestación de sus servicios el salario mínimo legal mensual vigente, dejándose evidente de la prueba testimonial, que las personas con igual cargo al desempeñado por la actora recibían una remuneración superior; sin embargo, en este contexto judicial, a más de contar con esa información, se tienen tres constancias de nómina de Jaime A. Zapata (fls. 192-193) de enero de 2016 y 2017 y septiembre de 2017 quien en este trámite dio a conocer su calidad de vinculado directo a Proplas S.A, pero además de apreciarse un salario variable, es ausente el detalle de la equivalencia de jornada de trabajo, rendimiento y eficiencia - artículo 143 CST-, necesario para establecer igual salario ante compañeros de idéntico cargo, por lo que no contando con los elementos suficientes que permitan advertir una nivelación en derecho a cargo de Proplas S.A, no existe manera para efectuarla bajo las condiciones normativas que ello implica, resultando impropio imponer condena sobre reajustes salariales en el sentido expuesto.

Beneficios convencionales

Igualmente, compete a esta Sala de Decisión dar estudio a las prerrogativas extralegales contenidas en la Convención Colectiva vigente para el año 2015, aplicable al particular en el marco de lo contenido en su cláusula duodécima y que establece que: “...se aplica a todos los trabajadores sindicalizados de Proplas S.A y los que no tengan la calidad de sindicalizados, en los términos establecidos por la ley”.

Acudiendo al pacto colectivo suscrito el 5 de junio de 2015 (fls. 181-187), su artículo 5° tiene contemplado un **“aumento de salarios”** (fl. 181 vto) equivalente al que resultara de aplicar al salario base al 31 de diciembre de cada año, el incremento que registre el IPC calculado por el DANE entre el 01 de enero y el 31 de diciembre del año inmediatamente anterior, más unos incrementos adicionales detallados en un cuadro², arrojando ello un valor adeudado por incrementos salariales de **\$440.552** como se detalla a continuación, advirtiéndose la configuración del fenómeno prescriptivo - artículos 488 del CST y 151 del CPTSS-, pues tal beneficio se entiende otorgado para la anualidad de 2015, y al ser presentada la demanda el 08 de julio de 2019 (fl. 26), se encuentran afectados por este fenómeno los causados previos al 01 de julio de 2016.

AÑO	VR. SALARIO	% IPC ³ +0,75	N° MESES	TOTAL
2016	\$ 689.455	\$ 51.847	6	\$ 311.082
2017	\$ 737.717	\$ 47.952	2,7	\$ 129.470
			TOTAL	\$ 440.552

La cláusula sexta por su parte, trae consigo una **“prima de vacaciones”** (fl.184 vto) cubierta en el momento que salga a hacer uso de ellas así: 2015: \$264.000, 2016: \$275.000, 2017: \$285.000 y 2018: \$300.000, la que acorde al tiempo servido por la activa y el extremo final de la relación - 11 de marzo de 2017- corresponde a un total de **\$595.208**, sin que existan valores por prescribir, atendiendo la fecha de causación de las vacaciones y la data en que se promovió la acción judicial.

El artículo séptimo del clausulado convencional consagra la **“prima de antigüedad”**, que sería pagada en la semana siguiente a aquella en que el

² 2015: +1.00%
2016: +0.75%
2017: +0.75%
2018: +0.75%

³ 2016: 6.77, 2017: 5.75

trabajador cumpla el tiempo de servicios que lo hacen acreedor a dicho beneficio conforme a tabla anexada (fl. 185) iniciando con un incentivo para el año 2015 a partir de los 5 años de servicios continuos, que alcanzó Zulema Álvarez para el año 2011 cuando aún no se encontraba dispuesta esta concesión, causándose para su caso el incentivo de los 10 años de servicios continuos el 20 de noviembre de 2016, correspondiéndole por este concepto la suma de **\$300.000**, con la observación que se trata de un concepto que se disfruta una sola vez cada que se consuma el tiempo determinado en la estipulación colectiva y no año a año como es liquidado por la parte actora.

La cláusula décima, dispuso los “**aguinaldos**”, dirigido a los trabajadores vinculados el 20 de diciembre de cada año, a quienes se les reconocería una suma igual a treinta (30) días de salario ordinario básico si trabajó el año completo o una suma proporcional al tiempo trabajado por fracción de año. En el asunto, la demandante se entiende vinculada a Proplas S.A desde el 20 de noviembre de 2006, por lo que para el mismo mes y día del año 2015 causó el primer aguinaldo, dejándose pasar el término trienal, que conlleva al reconocimiento de este beneficio a partir del año 2016 y que asciende a **\$741.302**. Para el 20 de diciembre de 2017 la demandante no logró la permanencia en el cargo, lo que da cuenta que para esa anualidad este beneficio no fue causado.

Prestaciones legales con incremento salarial

Sobre los beneficios legales y extralegales no recibidos por la demandante, se atiende a la confesión derivada del interrogatorio de parte absuelto por Zulema Álvarez, cuando señaló haber percibido en debida forma sus garantías legales en relación con sus acreencias laborales, suministrada en su momento a nombre de Sintrainduplascol. No obstante ello, es claro que para los años 2016 y la proporción del año 2017 laborada como fue definido previamente, la demandante debió devengar un salario superior al mínimo legal recibido, debiendo procederse con el cálculo del reajuste prestacional legal por este período contando con el salario incrementado acorde a los privilegios de la

convención colectiva, adeudándose a Zulema Álvarez Peña la suma de **\$242.439⁴**.

Indemnización por falta de pago

La mora incluida dentro del artículo 65 del CST, está dirigida al empleador incumplido, que al no ser automática, para su procedencia debe analizarse de manera previa la conducta del empleador, con la finalidad de establecer si en ella hay ausencia de una adecuada dosis de probidad o pulcritud, en contraposición con el obrar de buena fe, lo que comprende también otros factores, tales como la indiferencia por los derechos del trabajador, la apatía, la dejadez, el desinterés, y la negligencia que muestra el empleador frente al asalariado al mantener al garete su derecho al pago de tales acreencias (Ver SL15.507 de 2015, SL 2833 de 2017 y SL3614 de 2020).

Sobre esta condena, ha de indicarse que resulta evidente un comportamiento revestido de mala fe por parte de quien se determinó fungió como parte empleadora, en la medida que la utilización indebida de figuras contrataciones en las que claramente el poder subordinante provenía de Proplas S.A, fue consciente y a todas luces contraria a los postulados con los que se pretende evitar la intermediación laboral, predominando la indiferencia por los derechos de la trabajadora, a quien claramente la vinculación disfrazada la perjudicaba en su valor salarial, sus prestaciones y beneficios convencionales, no existiendo mérito para justificar que la demandante por más de 10 años suplió una actividad misional permanente que por disposición legal está prevista para que la ejerza el personal de planta, y en dicho interregno se aprovechó la sociedad demandada de la subordinación de una trabajadora deslaboralizada, con plena certeza de los efectos que esto tiene en el desconocimiento del orden jurídico laboral, por lo que no es dable predicar una conducta de buena fe y por tanto, no surgen razones atendibles para exculpar del pago de indemnización moratoria (Ver SL3086-2021, SL1174-2022), igual juicio por el que procede la sanción establecida en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 pues

⁴2016: \$218.574
2017: \$23.865

ha sido pacífica la postura adoptada por la Corte Suprema de Justicia, que resulta aplicable esta sanción tanto para el pago parcial como para el no pago (Ver SL1451-2018).

Es así como, se impone una condena por indemnización por falta de pago de **\$18.856.056** correspondiente a un día de salario por cada día de retardo a partir del 12 de marzo de 2017 y por 24 meses, debiendo seguirse reconociendo a la trabajadora a partir del 13 de marzo de 2019 - cuando inició el mes 25- intereses moratorios a la tasa máxima de créditos de libre asignación certificados por la Superintendencia Bancaria.

Por la sanción en razón de no consignar de manera completa las cesantías en un Fondo, se adeuda el equivalente a **\$7.808.382** en razón a las cesantías causadas en el año 2016 que debieron ser consignadas el 14 de febrero de 2017, pues la sanción que se causó a partir del 14 de febrero de 2016 se vio afectada por la prescripción, sin que haya lugar a imponer este rubro por la proporción de la fracción servida en el 2017 por no nacer para la demandada la obligación de consignar en el fondo las cesantías correspondientes a ese período.

Indemnización por despido sin justa causa

Sobre este tópico se tiene que la pasiva da legalidad a la terminación de la demandante amparada en el mutuo acuerdo suscrito entre las partes el 11 de marzo de 2017 (fl. 54) donde ninguna consecuencia se generó por tratarse de una relación no laboral, que al ser desdibujada en este trámite judicial se deja sin peso tal determinación, además porque de la testimonial se desprende que el fenecimiento del vínculo de Zulema Álvarez Peña fue por decisión de Proplas S.A ante la falta de necesidad del servicio propiciada por las bajas de la producción, lo que claramente queda derruido por la naturaleza misma de la contratación que en la realidad se ejecutó, debiendo concluirse que como parte empleadora, Proplas S.A no tuvo razón justa para dar fin al contrato de trabajo que se venía ejecutando por más de 10 años bajo condiciones de permanencia

y estabilidad, estando a su cargo el reconocimiento de la indemnización en cuantía de **\$5.661.178** bajo la concepción de haberse pactado el enlace de carácter laboral bajo modalidad indefinida acorde a lo regulado en el artículo 47 del CST en coherencia con lo estipulado en el artículo 64 del mismo estatuto sustancial.

Aportes Seguridad Social

Los aportes al Sistema de Seguridad Social en pensiones que contiene la pretensión cuarta de la demanda, claramente deben ser reajustados con base a los salarios incrementados en los años 2016 y 2017, correspondiendo para esas anualidades a \$741.302 y \$785.669 respectivamente, lo que habrá de realizarse previo cálculo actuarial efectuado por Colpensiones, entidad en favor de quien debe propenderse por el pago a nombre de Zulema Álvarez Peña.

De la solidaridad

De cara al asunto abordado, es indispensable recurrir a lo dispuesto en el artículo 35 del CST que en lo pertinente señala:

“...se considera como simples intermediarios, aun cuando aparezcan como empresarios independientes, las personas que agrupan o coordinan los servicios de determinados trabajadores para la ejecución de trabajos en los cuales utilicen locales, equipos, maquinarias, herramientas u otros elementos de un empleador para el beneficio de éste y en actividades ordinarias inherentes o conexas del mismo.

El que celebre contrato de trabajo obrando como simple intermediario debe declarar esa calidad y manifestar el nombre del empleador. Si no lo hiciere así, responde solidariamente con el empleador de las obligaciones respectivas”.

Transcripción que resulta suficiente para advertir dada la encontrada intermediación laboral que permitió Sintrainduplascol, aun con su rol de protección de los derechos de los trabajadores, su calidad de solidaria responsable frente a las condenas impuestas.

Bajo todas las anteriores reflexiones normativas, jurisprudenciales y convencionales, la decisión conocida en apelación será revocada para su lugar emitir condena en los términos delimitados en esta decisión.

Conforme a lo establecido en el artículo 365-4 del CGP, las costas en ambas instancias son a cargo de las entidades vencidas. En esta sede las agencias en derecho se fijan en la suma de \$1.300.000 a cargo de cada demandada.

DECISIÓN:

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Cuarta de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, **REVOCA** la sentencia apelada de fecha y procedencia conocidas, para en su lugar: **DECLARAR** la existencia de un contrato de trabajo entre ZULEMA ÁLVAREZ PEÑA y PROPLAS S.A bajo modalidad indefinida ejecutado entre el 20 de noviembre de 2006 y el 11 de marzo de 2017, finiquitado por decisión unilateral y sin justa causa de la parte empleadora interviniendo Sintrainduplascol como un simple intermediario que lo hace solidariamente responsable de las obligaciones a reconocer. **CONDENAR** a los demandados a pagar a la demandante, los siguientes conceptos laborales:

- \$440.552 (Cuatrocientos cuarenta mil quinientos cincuenta y dos pesos) por incremento salarial convencional.
- \$595.208 (Quinientos noventa y cinco mil doscientos ocho pesos) por prima de vacaciones convencional.
- \$300.000 (Trescientos mil pesos) por prima de antigüedad convencional.
- \$741.302 (Setecientos cuarenta y un mil trescientos dos pesos) por aguinaldo convencional.
- \$242.439 (Doscientos cuarenta y dos mil cuatrocientos treinta y nueve pesos) por concepto de prestaciones sociales y vacaciones legales.
- \$18.856.056 (Dieciocho millones ochocientos cincuenta y seis mil cincuenta y seis pesos) por sanción moratoria consagrada en el artículo 65 del CST, y a partir del 13 de marzo de 2019, se pagarán intereses moratorios a la tasa

máxima de créditos de libre asignación certificados por la Superintendencia Bancaria.

- \$7.808.382 (Siete millones ochocientos ocho mil trescientos ochenta y dos pesos) por concepto de la sanción por pago deficitario de cesantías.

- \$5.661.178 (Cinco millones seiscientos sesenta y un mil ciento setenta y ocho pesos) por concepto de indemnización por despido sin justa causa.

- El reajuste de los aportes al Sistema de Seguridad Social en Pensiones a nombre de la trabajadora pero a órdenes de Colpensiones, en los términos en que quedó anotado en la parte motiva de esta providencia.

ABSOLVER a Proplas S.A y a Sintrainduplascol de las restantes súplicas.

Las costas en ambas instancias son a cargo de las entidades vencidas. En esta sede las agencias en derecho se fijan en la suma de \$1.300.000 a cargo de cada demandada.

Notifíquese por EDICTO.

Los Magistrados,



CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES



MARÍA EUGENIA GÓMEZ VELÁSQUEZ



NANCY GUTIERREZ SALAZAR

**REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
SALA LABORAL**



SECRETARÍA

EDICTO

El Secretario de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín:

HACE SABER:

Que se ha proferido sentencia en el proceso que a continuación se relaciona:

Radicación:	05360310500220190017401
Proceso:	Ordinario
Demandante:	ZULEMA ALVAREZ PEÑA
Demandado:	PROPLAS S.A Y OTROS
M. P.	CARLOS ALBERTO LEBRUN MORALES
Fecha de fallo:	19/07/2022
Decisión:	REVOCA

El presente edicto se fija por el término de un (01) día hábil, con fundamento en lo previsto en el artículo 41 del CPTSS, en concordancia con el artículo 40 *ibidem*. La notificación se entenderá surtida al vencimiento del término de fijación del edicto.

Se fija hoy 21/07/2022 desde las 08:00 am. y se desfija a las 05:00 pm.

RUBÉN DARÍO LÓPEZ BURGOS
Secretario